

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, primero (01) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**

DEMANDANTE	: ARMANDO GRAJALES ARBOLEDA
DEMANDADO	: DARIO ORLANDO LOPEZ ORTEGA
TIPO DE PROCESO	: EJECUTIVO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-012-1999-00041-01
RADICADO INTERNO	: 305-22
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO.
ACTA NÚMERO	: 247

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

Dentro del presente proceso ejecutivo la apoderada de la parte ejecutada mediante escrito del 13 de diciembre de 2021, solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar el desistimiento tácito, teniendo en cuenta el inciso b del numeral 2 del artículo 317 del código general del proceso por cuanto han pasado más de dos años de inactividad en el proceso, aun cuando existe auto que ordena seguir adelante la ejecución, sin que la parte demandante ejerza actuación alguna.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, decretar el levantamiento de las medidas cautelares de los bienes inmuebles embargados identificados con matrículas inmobiliarias números 002-0006428, 002- 0006429, 002-0006430, 002-0006431, y 002-0006432, ubicados en la Urbanización Balcones de Abejorral, Manzana C, lotes 9,10,11,12 y 13.

TERCERO: Dar por terminado el proceso, disponiendo del archivo del expediente previamente efectuadas las anotaciones que fueren necesarias”.

Lo anterior con fundamento en los siguientes hechos:

**“PRIMERO:** En el **JUZGADO DOCE LABORAL DE CIRCUITO DE MEDELLÍN**, se adelantó proceso ejecutivo laboral en contra del señor **DARÍO ORLANDO LÓPEZ ARTEAGA**, al cual le correspondió el radicado N° 1999-00041-00; procedimiento dentro del cual con providencias expedidas los días 15 de Agosto de 2001 y 30 de agosto de 2001, se decretan medidas cautelares de embargo sobre los inmuebles propiedad del demandado identificado con matrículas inmobiliaria Nro. 002-0006428, Nro. 002-0006429, Nro. 002-0006430, Nro. 002-0006431, y Nro. 002-0006432, ubicados en la Urbanización Balcones de Abejorral, Manzana C, lotes 9,10,11,12 y 13 respectivamente.

**SEGUNDO:** Continuando con el trámite procesal correspondiente, se profiere por parte del despacho accionado el día 6 de noviembre de 2002 auto que ordena seguir con la ejecución, en donde además se ordena el remate y avalúo de los bienes embargados, practicar la liquidación del crédito, entre otros.

**TERCERO:** Posteriormente, dentro de este proceso, se adelantó desde el año 2001 varias solicitudes de remate ante su Despacho, hasta el 18 de julio del 2006 que fue la última diligencia de remate, declarándose así desierta.

**CUARTO:** El día 9 de marzo de 2020, fallece el demandante del presente proceso, el señor **ARMANDO GRAJALES ARBOLEDA (Q.E.P.D)**. **QUINTO:** Desde la última vez que fue declarado desierto el remate esto es 18 de Julio de 2006, hasta la actualidad, no se ha efectuado ninguna actividad que impulse el proceso, ni por la parte demandante (Q.E.P.D) ni por sus herederos si los llegase a tener.

**SEXTO:** El presente proceso no puede dejarse al arbitrio del tiempo sin lograr alguna forma de terminación ya que hay bienes inmuebles del demandado que le están ocasionando perjuicios con dicho embargo sin ser efectivos y encontrándose inactivo demasiado tiempo esto es por más de 20 años”.

En virtud de lo anterior el juzgado mediante auto del 30 de agosto de 2022 niega la solicitud de desistimiento tácito al considerar que dicha figura no se aplica en materia laboral.

### **RECURSO DE APELACION.**

Ante lo anterior la apoderada de la parte ejecutada interpone recurso de reposición y en subsidio apelación reiterando los supuestos de hecho ya manifestados en la solicitud inicial y agregando que debe tenerse en cuenta que por analogía que tal como lo enuncia el Código Procesal del Trabajo en su artículo 145, “a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas”.

Que cuando se analiza el artículo 317 se debe tener en cuenta que esta es una carga procesal que tienen las partes y el director del proceso y que el incumplimiento como tal de una carga acarrea unas consecuencias como lo son para este caso la terminación del proceso.

Que según la Sentencia C- 590 de 2005, la Sala de Plena ha precisado los supuestos en que una decisión judicial incurre en la falencia señalada, que consisten en: - A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.- Cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.

Que además también opera en el ordenamiento jurídico colombiano la aplicación analógica de las normas contempladas en el artículo 1 de la Ley 1564 de 2012 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Que la ley le permite al juez realizar actos que no tengan formas determinadas en la ley, también en desarrollo del principio de lealtad procesal puede rechazar las solicitudes o actos que impliquen dilaciones o la ineficacia del proceso. Al respecto, el artículo 40 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra además el principio de libertad. Los actos del proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad. Lo anterior, además teniendo en cuenta el artículo 49 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que también consagra: Principio de lealtad procesal. Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, y el Juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

Que los argumentos esbozados para negar la consagración y aplicación del desistimiento tácito en materia laboral son insuficientes, pues el Código General del Proceso, también ha dotado al juez de amplios poderes para evitar la paralización de los procesos, pero además le da una herramienta de carácter sancionatorio que invita a las partes a impulsar los procesos so pena de su terminación por desistimiento tácito, y las consecuencias negativas que su declaratoria conlleva. Panorama muy diferente al que ofrece la norma de la contumacia, la cual acarrearía como única consecuencia el archivo de las diligencias.

Que, por lo anterior, se debe dar aplicación a las normas por analogía y decretar el desistimiento tácito dado que el proceso lleva una inactividad de más de 20 años y no debe dejarse al arbitrio del tiempo sin lograr la terminación del proceso dado que hay bienes inmuebles del demandado que le están ocasionando perjuicios con dicho embargo.

Adicional a lo anterior, deberá valorarse que las medidas cautelares tampoco pueden ser indefinidas e indeterminadas y que 20 años se pretenda que el demandado no tenga la forma jurídica de que se levante dichos gravámenes.

Cita la sentencia de radicado Rad. No. 11001-02-03-000-2017-00830-00, con el magistrado ponente ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO en la cual señaló entre otras cosas lo siguiente:

"(...) Bajo esta perspectiva, y dejando de lado toda la teoría que se cierne sobre el desistimiento tácito, en particular en aquellos procesos ejecutivos que ya han superado la primera fase, esto es, que ya se ha dispuesto continuar la ejecución, sobre lo que nada se discute, de acuerdo con el artículo 317 de la nueva regulación:

Así mismo hace alusión a la sentencia STC7379 de 7 de junio de 2019, rad. 2019-001610, reiterada en sentencia de 8 de mayo de 2020 rad. 2020-00031-01, indicando que, en esta última, explicó que, en los litigios, si alguna de las partes realiza actuación de cualquier naturaleza con anterioridad a la declaración de terminación del proceso por desistimiento tácito, de conformidad con lo prescrito en el literal c) del numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, interrumpiría el término para la declaratoria del desistimiento tácito.

Que, de conformidad con la norma citada, consideró que era indispensable anotar que lo ahí previsto en absoluto hacía alusión a alguna particularidad en

la parte que deba realizar la actuación o a la naturaleza de la misma, siendo restringido para el juez de instancia hacer calificación alguna respecto a la misma más allá de considerarla como el impulso procesal de la parte, requerido para la inoperancia de la aludida figura.

Que además existen dos sanciones derivadas del decreto del desistimiento tácito, a saber: la terminación del proceso junto con la cancelación de las medidas cautelares (en caso que existieran) y la condición que no permite radicar nuevamente la demanda hasta tanto hubiesen transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria de la providencia.

Que no puede perderse de vista que la propia jurisprudencia constitucional puso de presente en la sentencia C-918 de 2001 menciona que “toda vez que el éxito y efectividad de este proceso depende de los bienes que posea el deudor o ejecutado o llegue a tener a futuro, máxime cuando el título ejecutivo está expuesto a prescribir de no iniciar el acreedor el proceso judicial respectivo”. Por último, respecto del artículo 121 del C.G. P., en fallo reciente de la CSJ, Sala Civil, sent. STC-148272018 de noviembre 14 de 2018, M.P. Aroldo Wilson Quiroz, manifestó:

“Salvo interrupción o suspensión por causa legal, los jueces civiles están obligados perentoriamente a emitir sentencia durante el término del año contado desde la notificación al demandado, sin salvedad alguna en caso de reforma o sustitución por parte del demandante”. Así las cosas, enfatizó que el plazo para dictar sentencia es objetivo y no admite modificación.

En virtud de todo lo mencionado solicita revocar el auto de primera instancia y en su lugar decretar el desistimiento tácito, decretar el levantamiento de las medidas cautelares de los bienes inmuebles embargados, y se ordene el archivo del proceso.

En virtud de lo anterior el juzgado mediante auto del 13 de septiembre de 2022 no repuso la decisión y en su lugar concedió el recurso de apelación.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Las partes no presentan alegatos de conclusión.

## CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en determinar si debe o no decretarse el desistimiento tácito al tenor de lo consagrado en el inciso b del numeral 2 del artículo 317 del código general del proceso.

Al respecto debe señalarse que el derecho procesal laboral y el derecho laboral, tiene unos principios propios que en ocasiones no se compaginan con el código General del proceso, prevaleciendo los primeros, por ello primero debe acudirse a las normas y principios en que se cimienta el derecho laboral y luego para llenar los vacíos debe irse en remisión conforme al artículo 145 al Código General del proceso.

El artículo 317 del código General del proceso se refiere a este.

*“2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes.*

*El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:*

- a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;*
- b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”;*

Sobre el tema del desistimiento tácito, existe claridad de que el mismo opera solo para el proceso civil, pues en el proceso laboral, el principio de contumacia, impide que se paralice el proceso, por el principio inquisitivo, en donde el juez tiene el deber de impulsar y llevar a buen término el proceso, y si han transcurridos más de 6 meses de inactividad de las partes, se puede producir un archivo administrativo, proceso que puede ser reanudado en cualquier momento, sin perjuicio de la figura jurídica de la prescripción.

La Corte Constitucional en sentencia C-868/10 declaró exequible el artículo segundo de la ley 1194 de 2008 “por medio del cual se reforma el código de procedimiento civil y se dictan otras disposiciones”, señalando que solo era aplicable este “a los procesos de naturaleza civil y de familia” y agregando que “... (iii) La ritualidad del proceso laboral está basada en audiencias y el procedimiento es eminentemente oral, dotado de elementos procesales que garantizan su celeridad y dinamismo permanente, acentuado en mayor medida con la expedición de la Ley 1149 de 2007, regulación que no deja espacio a la aplicación del desistimiento tácito en la medida en que no hay lugar a la inactividad de una de las partes o al estancamiento del proceso.

*“El artículo 30 del Código de Procedimiento Laboral, denominado “procedimiento en caso de contumacia”, prevé unas circunstancias particulares respecto de las cuales se produce un impulso oficioso del proceso laboral que impide su paralización indefinida: (i) la falta de contestación de la demanda; (ii) la ausencia injustificada del demandado o de su representante en las audiencias; (iii) la falta de comparecencia de las partes, y (iv) la falta de gestión para la notificación de la demanda, cuando han transcurrido seis meses después del acto admisorio de la misma. En este caso, el parágrafo del artículo 30 establece que “si transcurridos seis (6) meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvenición, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación el juez ordenará el archivo de las diligencias o dispondrá que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente”. ... En el caso del proceso laboral, si bien al juez no le es permitido el inicio oficioso de los procesos porque cada uno de ellos requiere de un acto de parte, (la presentación de la demanda), una vez instaurada, el juez debe tramitar el proceso hasta su culminación, y si una de las partes o ambas dejan de asistir a las audiencias, no por ello se paraliza el proceso, pues el juez debe adelantar su trámite hasta fallar. En tal proceso, el legislador optó por dotar al juez de amplísimos poderes como director del mismo y complementariamente estatuir la figura de la contumacia con un triple efecto: (i) evitar la paralización del proceso en unos casos, (ii) proceder al archivo del proceso en otros, (iii) continuar con el trámite de la demanda principal; y (iv) asegurar que la protección de los derechos de los trabajadores no se postergue indefinidamente por la falta de actuación del empleador demandado. Y esto es así porque el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.*

Además de lo anterior la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, providencia AL1290-2017, radicación 70020, ha indicado al respecto que:

*“Sea lo primero precisar que la figura del desistimiento tácito, como una forma anormal de terminación del proceso, se acredita con la inactividad de la parte a cuya instancia se promovió un trámite, el cual se paralizó por su causa; empero, su aplicación tiene lugar en los procesos civiles y de familia, pues para el caso del procedimiento laboral, además de las facultades que tiene el juez como director del proceso (art. 48 del C. P. L. y de la S.S.), la ley le confiere herramientas para que, en caso de contumacia, esto es, cuando se presenta la paralización o la inactividad injustificada del proceso, pueda impulsar oficiosamente el asunto sometido a su consideración, lo cual impide, así sea por vía analógica, la aplicación*

*del desistimiento tácito previsto en el artículo 317 del Código General del Proceso”.*

Por lo anterior esta figura no es aplicable al proceso laboral, tal como lo afirmó la juez de primera instancia, razón por la cual deberá confirmarse la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada en la suma de \$200.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

### **EL FALLO DEL TRIBUNAL**

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, según las razones argumentadas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutada en la suma de \$200.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

**CUARTO:** La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados,



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



Radicado Único Nacional 05-001-31-05-012-1999-00041-01  
Radicado Interno 305-22

  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 218 del 02 de  
diciembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>